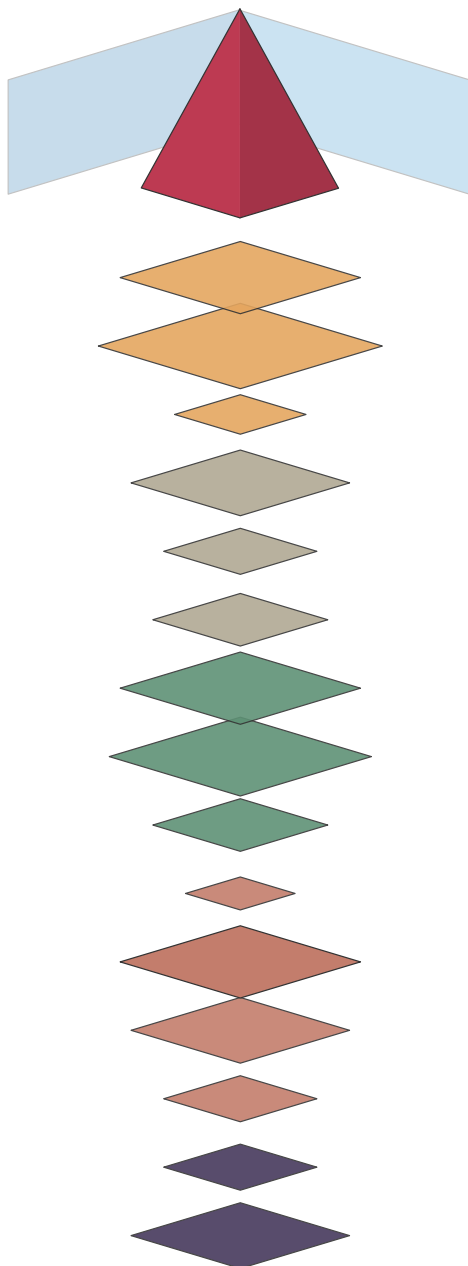




BELICE



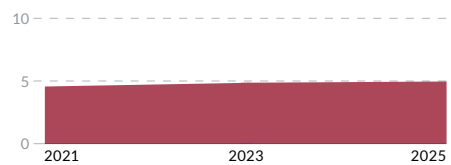
4.97 $\nearrow 0.10$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

103.º de 193 pays $\nearrow 3$

23.º de 35 países americanos -

8.º de 8 países de América Central -



MERCADOS CRIMINALES 4.53 $\nearrow 0.10$

TRATA DE PERSONAS	5.50	0.00
TRÁFICO DE PERSONAS	6.50	$\nearrow 0.50$
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	3.00	$\searrow 0.50$
TRÁFICO DE ARMAS	5.00	0.00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	3.50	0.00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	4.00	0.00
DELITOS CONTRA LA FLORA	5.50	0.00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6.00	$\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	4.00	$\nearrow 0.50$
COMERCIO DE HEROÍNA	2.50	$\searrow 1.00$
COMERCIO DE COCAÍNA	5.50	$\nearrow 0.50$
COMERCIO DE CANNABIS	5.00	$\searrow 0.50$
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3.50	$\nearrow 0.50$
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	3.50	0.00
DELITOS FINANCIEROS	5.00	$\nearrow 1.00$



ACTORES CRIMINALES 5.40 $\nearrow 0.10$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	6.50	0.00
REDES CRIMINALES	3.50	0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	5.50	0.00
ACTORES EXTRANJEROS	6.00	$\nearrow 0.50$
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	5.50	0.00



Financiamiento
proporcionado por
el Gobierno de los
Estados Unidos.

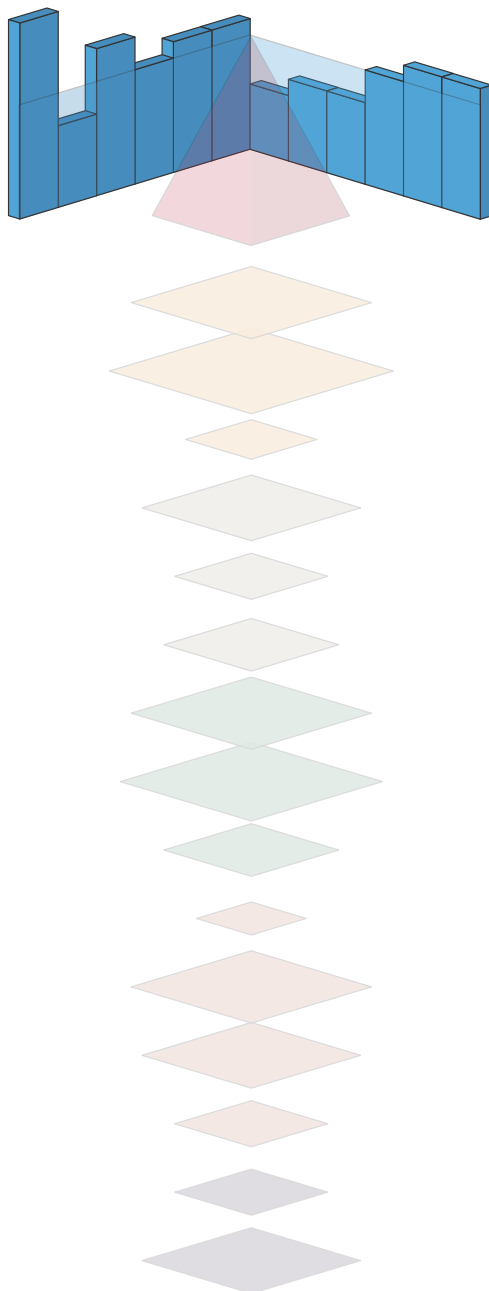


Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.



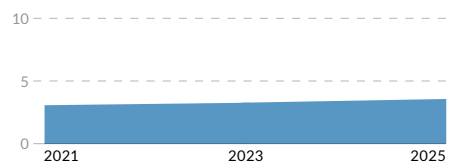
BELICE



3.58 $\nearrow 0.29$

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

147.º de 193 países $\nearrow 8$
29.º de 35 países americanos $\nearrow 1$
6.º de 8 países de América Central -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6.00	0.00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2.50	0.00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4.50	$\nearrow 0.50$
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3.50	0.00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4.00	0.00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4.00	0.00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	2.00	0.00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2.50	$\nearrow 0.50$
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	2.50	$\nearrow 1.00$
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3.50	$\nearrow 0.50$
PREVENCIÓN	4.00	$\nearrow 1.00$
ACTORES NO ESTATALES	4.00	0.00



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Belice es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, que son sometidas a explotación sexual y trabajo forzoso. Aunque las actividades de tráfico ilícito en Belice siguen siendo a pequeña escala y, en gran medida, ajenas a las redes organizadas transnacionales, por su situación geográfica el país es un paso fundamental para la trata. Las mujeres y los menores de América Central y en particular los de Honduras son cada vez más vulnerables a la explotación sexual. Muchas víctimas son atraídas con falsas promesas de trabajo y acaban siendo explotadas en bares, discotecas y hoteles. La trata interna sigue siendo motivo de preocupación, ya que se ha encontrado a niños beliceños sometidos a la explotación sexual comercial y a trabajos peligrosos en la agricultura, la construcción y la minería. Las barreras lingüísticas impiden que Belice sea un actor importante en las redes internacionales de trata, pero los actores independientes y los grupos delictivos regionales siguen operando dentro de sus fronteras.

El tráfico de personas ha aumentado en Belice en el contexto de las crisis migratorias más amplias en América Central. El país es un lugar de tránsito para los migrantes que huyen de las dificultades económicas, la violencia y los fenómenos climáticos extremos, especialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los traficantes facilitan la migración irregular a través de las fronteras porosas de Belice con México y Guatemala y a menudo utilizan redes de taxis y documentos falsificados. Hay funcionarios corruptos implicados en la expedición de sellos de inmigración fraudulentos y en la facilitación de cruces fronterizos ilícitos. Si bien algunos beliceños tratan de entrar ilegalmente en Estados Unidos, hay casos de migrantes que son víctimas de extorsión y robo cuando entran en México. Las disputas fronterizas entre Belice y sus vecinos agravan las vulnerabilidades del mercado del tráfico ilícito.

La extorsión está presente, pero sigue siendo menos violenta que en los países vecinos. Desde siempre, las bandas atacan a las empresas, en particular a los establecimientos de propiedad china, en la zona sur de la ciudad de Belice. No obstante, al parecer estas actividades ilícitas no son sistemáticas, ya que la violencia relacionada con la extorsión sigue siendo limitada en Belice.

TRÁFICO

El tráfico de armas sigue siendo un reto en Belice, ya que el país sirve tanto de lugar de tránsito como de proveedor de armas para las organizaciones criminales. Aunque la participación de las bandas locales en el tráfico internacional de armas es limitada, los actores a pequeña escala facilitan el movimiento de armas de fuego. Las fronteras porosas de Belice permiten el contrabando de armas de origen estadounidense hacia México, Guatemala y Honduras. El papel del país en el tráfico de armas ha contribuido a la proliferación de armas de gran calidad, como rifles y granadas, que son accesibles tanto para las bandas como para la población civil. Algunos funcionarios corruptos de los pasos fronterizos están implicados en facilitar el desplazamiento de las armas. A pesar de la disminución de los índices de homicidios, la violencia relacionada con las armas de fuego sigue siendo elevada y en la mayoría de los homicidios que se producen en el país se utilizan armas ilegales.

Belice siempre ha sido un lugar de tránsito de productos electrónicos y eléctricos falsificados procedentes de China y de Singapur. El país también es un centro de distribución de cigarrillos falsificados que pasan por Panamá. Aunque no hay pruebas que relacionen el mercado de los productos falsificados con las organizaciones criminales, según los informes en el país ha aumentado la cantidad de productos farmacéuticos falsificados. El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, en particular el alcohol y los cigarrillos, es un problema importante. La Zona Franca de Corozal sirve de centro neurálgico para las operaciones de contrabando, con productos de tabaco procedentes de China, India, Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos. Además, el contrabando de azúcar hacia México ha provocado escasez en el mercado interno de Belice y se sospecha que algunos actores integrados en el Estado están facilitando este comercio. Se estima que la evasión fiscal relacionada con este mercado provoca importantes pérdidas de ingresos en la región.

MEDIOAMBIENTE

Los delitos contra la flora son una preocupación creciente en Belice, donde hay actores tanto nacionales como transnacionales que impulsan la tala ilegal y la deforestación. El comercio ilícito de madera, en particular de palo de rosa, caoba y cedro, se concentra a lo largo de la frontera entre Guatemala y Belice, donde los leñadores guatemaltecos realizan incursiones transfronterizas para extraer madera valiosa. La Reserva Forestal de Chiquibul sigue siendo un punto conflictivo para la tala ilegal, a pesar de los crecientes esfuerzos de las autoridades beliceñas por frenar esta actividad. Las redes organizadas aprovechan la escasa aplicación de la ley y las vastas zonas boscosas, lo que contribuye a la degradación del medioambiente.

Entre los delitos contra la fauna se incluye el tráfico de especies en peligro de extinción, como jaguares, guacamayos escarlatas, tortugas y loros exóticos. El comercio ilegal de especies silvestres responde, en gran medida, a la demanda de los mercados asiáticos, donde se contrabandean partes del cuerpo del jaguar para usarlos en la medicina tradicional. La región de Chiquibul es especialmente vulnerable a la caza furtiva de animales silvestres y han aumentado las incursiones desde Guatemala. Los recursos costeros de Belice también se ven amenazados por la pesca ilegal, en particular el comercio ilícito de caracolas y de langostas.

Los delitos contra los recursos no renovables, en particular la extracción ilegal de oro, se concentran en el bosque de Chiquibul. Hay actores criminales independientes que contrabandean mineral de oro a Guatemala para su procesamiento. La levedad de las sanciones y la aplicación indulgente de la ley fomentan la continuación de la minería ilegal, lo cual tiene consecuencias medioambientales, como la deforestación y la degradación del suelo.

En Belice también se han producido casos de contrabando de combustible y las autoridades han interceptado envíos ilícitos que se iban a vender en el mercado negro.

DROGAS

Belice es, en gran medida, un país de tránsito para la heroína que se transporta de México a Estados Unidos, aunque el consumo sigue siendo bajo, probablemente debido a que hay otras drogas disponibles en el mercado. Por el número limitado de incautaciones de heroína, se deduce que Belice desempeña un papel de poca importancia en este mercado. Las pruebas indican que el control del comercio de la heroína en Belice está en manos de los cárteles mexicanos, que contratan a beliceños locales para contrabandearla hacia el mercado mexicano y el estadounidense.

En cambio, el comercio de cocaína está muy activo en el país. Belice es un lugar importante de tránsito para la cocaína sudamericana que se dirige a México y a Estados Unidos y los traficantes utilizan pistas de aterrizaje y rutas marítimas clandestinas. Los aterrizajes de aviones con drogas siguen siendo frecuentes, especialmente en los distritos del norte, y las autoridades beliceñas tienen dificultades para interceptar a los traficantes, debido a la escasez de recursos. La expansión de la producción local de cocaína —se habla de plantaciones de coca y laboratorios de procesamiento de drogas en el sur de Belice— indica que se está pasando del tránsito a una producción limitada. Hay funcionarios corruptos implicados en facilitar los envíos de cocaína.

El comercio de cannabis sigue siendo significativo, a pesar de los recientes intentos para legalizarlo. En el 2022, la aprobación de la Ley de Control y Licencias del Cannabis y el Cáñamo Industrial permitió su producción y su venta reguladas, pero persiste el tráfico ilícito. La marihuana mexicana Purple Haze se introduce de contrabando en

Belice, donde alcanza precios elevados en el mercado interno. Pese al marco legal, las bandas locales siguen controlando algunas partes del comercio ilegal.

El mercado de las drogas sintéticas está creciendo y Belice se utiliza cada vez más como lugar de tránsito para los precursores químicos destinados a México. Las incautaciones indican la participación de actores independientes y de traficantes a pequeña escala en el contrabando de precursores. Las incautaciones de metanfetamina cristalina han aumentado, lo que sugiere una expansión del mercado local.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

La ciberdelincuencia es un problema, ya que las organizaciones criminales cometen diversos delitos, como violaciones de la seguridad de sitios web gubernamentales y ataques de ransomware, entre los que destaca uno a Belize Electricity Limited. Las estafas bancarias tienen como objetivo a los titulares de cuentas locales y los ciberdelincuentes desvían fondos a través de intermediarios. El país sigue siendo vulnerable a las amenazas cibernéticas, a causa de la debilidad de su infraestructura de ciberseguridad.

DELITOS FINANCIEROS

Belice tiene una larga reputación como paraíso fiscal, con delitos financieros que van desde las estafas de phishing y la malversación hasta la evasión fiscal y el fraude inmobiliario. Los casos de fraude a gran escala, como el escándalo «Sanctuary Belize», ponen de relieve las vulnerabilidades del marco regulador del país. Aunque el país ha quedado fuera de la lista negra de jurisdicciones no cooperativas de la UE en el 2024, la transparencia financiera sigue siendo un problema. Aún hay funcionarios corruptos que facilitan las actividades financieras ilícitas, lo que pone de relieve los retos a los que se enfrenta el país para combatir eficazmente los delitos financieros.

ACTORES CRIMINALES

Belice tiene más de 40 pandillas callejeras, pero un puñado de grupos dominantes, inspirados en pandillas estadounidenses, como los Bloods y los Crips, controlan gran parte del microtráfico de marihuana y crack. Su estructura descentralizada, caracterizada por alianzas fluidas y por la inestabilidad de su dirigencia, después de los asesinatos, hace que la violencia sea frecuente. Muchos de sus miembros están armados y se han documentado ataques con granadas. Estas bandas se concentran en la ciudad de Belice y se dedican al tráfico de drogas, la extorsión y las disputas territoriales, con entre 900 y 1 400 miembros que operan en gran medida como subordinados de los cárteles mexicanos. La fragmentación ha intensificado los conflictos, especialmente en la zona sur

de la ciudad de Belice, mientras que los limitados recursos de los cuerpos de seguridad complican los esfuerzos para frenar la violencia.

Las redes criminales prevalecen sobre todo en el mercado de las drogas sintéticas y cometen actos de violencia de baja intensidad. Existen redes criminales locales que se dedican al tráfico de especies silvestres, cannabis, crack y cocaína y a los delitos financieros, como los ataques de phishing. Cabe destacar que, en los últimos años, Belice se ha convertido en un centro regional de contrabando de cigarrillos con México, destinados a los mercados de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo que genera millones de dólares de beneficios, debido a la complicidad de los agentes de aduanas.

La corrupción es un problema sistémico en Belice, donde los actores integrados en el Estado desempeñan un papel crucial para facilitar el crimen organizado. La percepción de la corrupción ha empeorado en los últimos años y los cuerpos de seguridad y los partidos políticos se encuentran entre las instituciones que generan mayor desconfianza. También hay figuras políticas que se han visto implicadas como cómplices en actividades delictivas, con casos de gran repercusión, relacionados con sobornos, malversaciones y fraudes. El personal de los cuerpos de seguridad y el militar ha estado vinculado directamente con operaciones de tráfico de drogas y a lo largo de los años se han dado varios casos que ilustran esta tendencia. También ha habido informes de rifles de asalto propiedad del Gobierno que han aparecido en lugares de aterrizaje de aviones con drogas, lo que subraya aún más la preocupación por la corrupción dentro de las instituciones de seguridad.

Los grupos delictivos extranjeros, en particular los cárteles mexicanos, desempeñan un papel predominante en las actividades del crimen organizado transnacional de Belice. El Cártel de Sinaloa lleva más de una década en el país y utiliza Belice como lugar de tránsito clave para el tráfico de cocaína. También se han documentado operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones de drogas mexicanas. Al

parecer, algunos grupos transnacionales, como la MS-13, han utilizado la Zona Franca de Corozal, en Belice, para contrabandear mercancías a través de América Central, lo que indica una creciente influencia de las bandas regionales. Además, las autoridades han descubierto operaciones de tráfico de drogas dirigidas por actores extranjeros, como algunos miembros de los cárteles ecuatorianos. La isla de San Pedro, en Belice, un destino turístico popular, atrae a elementos criminales extranjeros y allí se han producido detenciones de traficantes internacionales. Por otra parte, las redes colombianas han colaborado con actores beliceños para establecer plantaciones de coca y laboratorios de procesamiento de drogas, lo que sugiere una evolución en el papel del país, que ha pasado de ser un mero centro de tránsito a un lugar de producción limitada. También se ha vinculado a delincuentes chinos con tramas de lavado de dinero, en particular a operaciones financieras relacionadas con las drogas para los cárteles mexicanos.

Los actores del sector privado desempeñan un papel importante en los delitos financieros en Belice, especialmente en el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Gracias a la banca extraterritorial y a las sociedades ficticias, por el país se mueven fondos ilícitos con una supervisión mínima. Aunque hace poco se ha quitado a Belice de la lista negra de paraísos fiscales de la UE, persiste la preocupación sobre la eficacia de su normativa para prevenir los delitos financieros. El fraude inmobiliario también ha sido un problema importante, ya que hay ciudadanos beliceños implicados en planes de inversión fraudulentos, dirigidos a inversores extranjeros. Además, las operaciones comerciales fraudulentas, como los proyectos inmobiliarios falsos, siguen aprovechando las lagunas normativas del sector financiero de Belice. La falta de aplicación de la normativa financiera permite a los delincuentes explotar el entorno empresarial del país para realizar actividades financieras ilícitas. El sector bancario extraterritorial sigue siendo un factor clave para el crimen organizado, ya que facilita el blanqueo de los ingresos procedentes del narcotráfico y del patrimonio ilícito.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El marco de gobernanza de Belice refleja tanto su estabilidad democrática como sus vulnerabilidades sistémicas. A pesar de los esfuerzos por fortalecer las instituciones políticas, persisten las deficiencias en la gobernanza, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El país muestra una estabilidad política bastante sólida y una participación ciudadana activa, lo que refleja un sistema democrático que funciona. Sin embargo, las deficiencias en el Estado de derecho y la calidad de la

regulación obstaculizan una gobernanza eficaz, lo que crea oportunidades para las actividades ilícitas. Las denuncias de detenciones arbitrarias, corrupción y abusos de los derechos humanos siguen poniendo en tela de juicio la credibilidad de la gobernanza. El Gobierno ha adoptado medidas para abordar estas cuestiones, pero su aplicación sigue siendo desigual. La postura oficial del Gobierno rechaza la participación en el tráfico de drogas o en el lavado de dinero. Sin embargo, la ubicación estratégica de Belice en América Central convierte al país en un centro de actividades de contrabando, facilitadas

por la débil aplicación de la normativa y por la corrupción de las autoridades. A fin de fortalecer la gobernanza, se ha tratado de reformar la Constitución, para que los delincuentes condenados no puedan acceder a los cargos públicos, pero la oposición política ha complicado su aplicación. Las recientes iniciativas de reforma constitucional tienen por objeto mejorar la rendición de cuentas del Gobierno, aunque su eficacia sigue siendo incierta. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad y el Gobierno ha puesto en marcha estrategias nacionales para combatir la ciberdelincuencia. Las autoridades también han tomado medidas para hacer frente al aumento de los índices de homicidios, pero la violencia relacionada con las bandas sigue siendo un reto importante.

También la corrupción es un obstáculo importante para la gobernanza, ya que los marcos jurídicos no alcanzan para hacer frente a los abusos sistémicos. Las leyes anticorrupción vigentes se centran principalmente en la mala gestión financiera, más que en la integridad institucional en general.

Se están impulsando llamamientos a favor de unos mecanismos de aplicación más estrictos, en particular en lo que respecta a la contratación pública y a la divulgación de información financiera. Existen leyes de transparencia, pero su aplicación es deficiente. Si bien la ley sobre el derecho a la información ofrece vías para la supervisión pública, las exclusiones y las lagunas en su aplicación limitan su eficacia. Según los informes, las denuncias de corrupción contra altos funcionarios apenas han tenido consecuencias jurídicas, lo que debilita la confianza de la población en las instituciones gubernamentales y refuerza la percepción de la impunidad de las élites políticas. Algunas iniciativas legislativas recientes, como la creación de la Unidad de Buena Gobernanza, tienen por objeto mejorar la transparencia, pero persisten los problemas sistémicos. La vigilancia internacional sigue presionando a Belice para que mejore sus normas de gobernanza.

El país mantiene alianzas internacionales para combatir el crimen organizado y cuenta con ayuda exterior y asistencia técnica. Estados Unidos y el Reino Unido brindan apoyo para la capacitación de los cuerpos de seguridad y la mejora de la seguridad fronteriza. Las colaboraciones regionales con la CARICOM, la Organización de los Estados Americanos y el Sistema de Integración Centroamericana facilitan el intercambio de información y las operaciones conjuntas de aplicación de la ley. Belice participa activamente en iniciativas internacionales de prevención de la trata de personas y colabora con la Organización Internacional para las Migraciones y con coaliciones regionales. Los esfuerzos de colaboración se han centrado en mejorar la protección de las víctimas y las medidas de aplicación de las leyes transfronterizas. A pesar de estas iniciativas, persisten los retos en materia de extradición y las autoridades estadounidenses tienen dificultades para garantizar el traslado de los ciudadanos beliceños buscados por tráfico de drogas. Las organizaciones internacionales siguen prestando apoyo a la capacitación de los cuerpos de seguridad de Belice. Sin embargo, las deficiencias en la aplicación de la ley a nivel nacional obstaculizan la eficacia de estas colaboraciones. Aunque Belice ha aumentado

su participación en las operaciones de la INTERPOL, las deficiencias en la seguridad fronteriza siguen siendo motivo de gran preocupación, ya que permiten que los grupos delictivos transnacionales operen con relativa facilidad.

Belice cuenta con una serie de marcos jurídicos para combatir el crimen organizado, entre los que se incluyen las normativas contra el tráfico de drogas, la trata de personas y los delitos financieros. Sin embargo, los problemas en su aplicación debilitan su eficacia. Las leyes vigentes contra el tráfico ilícito de personas son mínimas, lo que deja lagunas en la supervisión normativa. Los esfuerzos por ajustarse a las normas internacionales han dado lugar a la introducción de planes de acción nacionales, aunque su aplicación sigue siendo desigual. Se ha reforzado la legislación sobre los delitos ambientales, en particular con respecto a la protección de las especies silvestres y la pesca. Belice se ha comprometido a cumplir las convenciones internacionales sobre la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos marinos. No obstante, la aplicación de la ley no deja de ser esporádica y se siguen denunciando las talas y las pescas ilegales.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Las recientes reformas judiciales tienen por objeto modernizar el sistema judicial de Belice, incluido el establecimiento de un marco de tribunales superiores. Aunque estas medidas pretenden mejorar la eficiencia, los retrasos en los procedimientos judiciales y las elevadas tasas de prisión preventiva siguen tensionando el sistema. La preocupación por los enjuiciamientos selectivos y la influencia política debilita aún más la confianza en el proceso judicial. Aunque se ha tratado de mejorar la capacidad jurídica, persisten los retos para llevarlo a la práctica. El establecimiento de un marco de tribunales superiores representa un paso hacia la modernización, pero el Poder Judicial todavía carece de recursos suficientes y las limitaciones financieras impiden un avance significativo. El sistema penitenciario de Belice ha experimentado mejoras desde que lo gestiona una oenegé, pero se siguen denunciando tratos inhumanos. Los casos de prisión incomunicada prolongada y de asistencia jurídica inadecuada suscitan preocupación por los derechos humanos. Aunque existen programas de reinserción, la limitación de los recursos afecta su alcance y su eficacia. Se ha criticado a los cuerpos de seguridad por el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las incompatibilidades procesales, lo que merma aún más la confianza de la población en el sistema judicial.

Los cuerpos de seguridad de Belice se enfrentan a importantes retos en materia de recursos y de personal. Aunque el apoyo internacional ha mejorado su formación y su equipamiento, persisten las deficiencias estructurales. La corrupción en las filas de la Policía sigue debilitando los intentos de aplicar la ley, ya que hay denuncias contra agentes que aceptan sobornos y participan en actividades ilícitas. La limitada capacidad de vigilancia del país dificulta los esfuerzos para combatir

el tráfico de drogas. La percepción pública de la falta de ética policial ha empeorado, al aumentar las denuncias de abusos y extorsiones. A pesar de los mecanismos internos de rendición de cuentas, las medidas disciplinarias contra los agentes siguen siendo limitadas. Las organizaciones de la sociedad civil han pedido una mayor supervisión y reformas para abordar los problemas sistémicos dentro de los cuerpos de seguridad.

La seguridad fronteriza sigue siendo una vulnerabilidad crítica, ya que la escasa aplicación de la ley facilita las operaciones de contrabando transnacional. Las rutas de contrabando marítimo y aéreo, sobre todo a lo largo de las fronteras con México y Guatemala, siguen siendo difíciles de vigilar, debido a la insuficiencia de los recursos de radar y de la interceptación. Aunque se ha introducido la tecnología de los drones para mejorar la seguridad fronteriza, los cuerpos de seguridad siguen dependiendo en gran medida del intercambio internacional de información de inteligencia. Estos cuerpos tienen dificultades para mantener una vigilancia constante, lo que crea oportunidades para las redes del crimen organizado. No obstante, en el 2024, la Fuerza de Defensa de Belice declaró que reforzaría las patrullas a lo largo de la frontera norte, para impedir la incursión de los cárteles mexicanos. A pesar de estos esfuerzos nacionales y de la ayuda internacional para reforzar la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley sigue siendo desigual. La corrupción de los funcionarios fronterizos pone en peligro aún más los esfuerzos para frenar el tráfico. Las disputas territoriales en curso con Guatemala complican la coordinación en materia de seguridad, lo que limita la eficacia de la aplicación de la ley transfronteriza.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Belice ha tomado medidas para abordar los riesgos de lavado de dinero. Por ejemplo, se revisó la legislación clave para ajustarla más a las normas internacionales. Además, el país reforzó las facultades de las autoridades para mejorar la supervisión del sector financiero y el no financiero. También se trabajó en el fortalecimiento del régimen de propiedad efectiva, para mejorar la transparencia y la cooperación internacional, a fin de compartir información de manera más eficaz con sus homólogos extranjeros. A pesar de estas medidas, los retos en materia de aplicación debilitan su eficacia. El sector bancario extraterritorial sigue siendo una preocupación clave, ya que proporciona vías para los flujos financieros ilícitos. Como consecuencia de la presión internacional, se examina más el sector financiero de Belice y se han hecho esfuerzos para mejorar el cumplimiento de las normas mundiales de lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, las lagunas en la aplicación de la normativa siguen permitiendo los delitos financieros. A pesar de las reformas legislativas, la eficacia de la unidad de inteligencia financiera de Belice sigue siendo limitada y ha habido pocos juicios.

Belice ha tratado de mejorar su gobernanza económica, pero siguen existiendo debilidades estructurales. Aunque las evaluaciones internacionales han reconocido los progresos de Belice en materia de regulación financiera, persiste la preocupación sobre su estabilidad económica. Que el país ya no esté en las listas negras internacionales de paraísos fiscales refleja algunos avances, pero se sigue enfrentando a riesgos para su reputación, relacionados con el secreto financiero. Los intentos de reforzar la normativa en materia de inversiones se han topado con dificultades, especialmente en lo que respecta a la coherencia en la aplicación de la ley. Aunque la economía de Belice manifiesta resiliencia, las lagunas normativas en la supervisión financiera siguen creando oportunidades para las actividades financieras ilícitas. Las deficiencias normativas y la limitada transparencia siguen haciendo de Belice un centro atractivo para las actividades financieras delictivas.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Belice ha tomado medidas para mejorar los servicios de protección y apoyo a las víctimas, en particular a las de la trata. Se prestan servicios como asistencia social, alojamiento, atención sanitaria, asistencia jurídica y repatriación, todos financiados por el Estado. Las autoridades también han mejorado la coordinación entre departamentos, han actualizado los procedimientos operativos estándar y han aplicado nuevas directrices de derivación e identificación. Se ha impartido formación al personal de primera línea, en colaboración con oenegés y organizaciones internacionales. A pesar de estos avances, siguen existiendo lagunas notables. Las autoridades se han centrado de manera desproporcionada en detectar a los extranjeros. Algunos refugios se han mostrado reacios a acoger a víctimas masculinas, porque en el pasado ha habido problemas de seguridad, aunque finalmente se ha dado alojamiento a todas las víctimas masculinas. El temor a la detención o a la deportación ha disuadido a algunas víctimas de dar un paso al frente y la ausencia de disposiciones legales sobre permisos de trabajo para refugiados y migrantes indocumentados ha dejado a las víctimas expuestas a la explotación. En el ámbito de la política de drogas, Belice ha establecido estrategias para reducir la demanda de drogas, que abarcan la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, prestando atención a los factores de género y los culturales. Sin embargo, el país carece de programas de reinserción social, de mecanismos para evaluar la eficacia de los programas y de una colaboración significativa con la sociedad civil para elaborar políticas. Tampoco promueve medidas nacionales integrales acordes con las normas internacionales.

En los últimos años, Belice ha dado prioridad a la prevención de delitos y a la seguridad ciudadana, gracias a iniciativas centradas en datos, como el Plan de Acción Estratégico del Observatorio del Delito de Belice y la actual Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (2022-2027). El Gobierno ha reforzado las medidas contra la trata de personas a través del Consejo A-TIP, ha aumentado la financiación, ha identificado a más víctimas y ha ampliado las campañas de

sensibilización pública. Entre las medidas de prevención se incluyen un programa de amnistía para migrantes y nuevas restricciones de visado para los grupos de alto riesgo, aunque las deficiencias en la aplicación de la ley y los recursos limitados ponen trabas a su total implementación. Belice también ha avanzado en materia de ciberseguridad, mediante la creación de un grupo de trabajo nacional, la puesta en marcha de un centro de investigación de delitos cibernéticos y el desarrollo de capacidades forenses digitales. A pesar de los avances, siguen existiendo retos, como la complicidad oficial, la limitada selección de víctimas y la escasa supervisión de los reclutadores de mano de obra y los establecimientos de alto riesgo.

La sociedad civil de Belice desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado, promoviendo la transparencia y la integridad institucional. Las ONGs y las organizaciones religiosas contribuyen de manera significativa a la divulgación en la comunidad. Las iniciativas refuerzan aún más la colaboración entre el público, los medios de comunicación y los cuerpos de seguridad. Aunque a nivel mundial se considera un país «libre», la libertad de prensa se enfrenta a retos. Los medios de comunicación están polarizados y a veces los periodistas sufren amenazas. La reciente Ley de Difamación, que amplía lo que se considera como tal, ha suscitado preocupación, porque limita a la prensa y reduce la transparencia.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.